

Primer plano

‘Si otro órgano determina que hubo delito de Jesús Santrich, deben juzgarlo’

El magistrado Jesús Ángel Bobadilla, autor del fallo que evita por ahora la extradición del exguerrillero, dice que además de guiarse por la Constitución, la JEP es la guardiana del acuerdo de paz.

MARISOL GÓMEZ GIRALDO- EDITORA DE JUSTICIA Y PAZ- EL TIEMPO @MariGomezGirald

Jesús Ángel Bobadilla, el magistrado ponente del fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que negó la extradición del exguerrillero Jesús Santrich y ordenó su libertad porque no se pudo determinar la fecha en la que habría cometido el supuesto delito de conspirar para enviar cocaína a Estados Unidos, dice que la Procuraduría está en el derecho de apelar si considera que hay razones para revocar el fallo.

¿El video sobre Santrich que comenzó a circular después del fallo y que ustedes no conocían habría cambiado la decisión?

Es una pregunta difícil. No he visto el video, pero si lo hubiéramos conocido oportunamente nos habría servido para evaluar la conducta y eventualmente determinar la fecha. La decisión se tomó tras una fase probatoria que extendimos por mucho tiempo para recibir la cooperación de otro Estado (Estados Unidos), y no la recibimos. No pudimos evaluar la conducta y, por ende, no pudimos determinar la fecha.

¿A qué atribuye que el video haya circulado después del fallo?

Yo no quisiera especular, pero es cierto que durante el proceso circularon en medios extractos de videos que nunca llegaron aquí. Nos llamaba la atención que no tenían audio, y eso quedó en el fallo.

¿Y qué opina de la decisión de la Procuraduría de apelar el fallo?

Está en todo su derecho. Yo he sido abogado litigando, y, por supuesto, uno



Jesús Ángel Bobadilla fue el magistrado ponente del fallo de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en el que se negó la extradición de Jesús Santrich. FOTO: CLAUDIA RUBIO. EL TIEMPO

ejerce la contradicción de las decisiones si considera que hay razones para revocarla.

En el fallo, ustedes argumentaron que con el material que les enviaron no pudieron determinar la fecha del delito que le atribuyen a Santrich, pero hay quienes creen que por esa misma duda no debieron ordenar la libertad del exguerrillero...

Si no pudimos determinar la fecha, resultaba más lesivo que una persona fuera extraditada y arriesgar de esa manera la paz y la seguridad jurídica de los excombatientes.

¿La Sala de Revisión de la JEP no sabe hoy si Santrich es inocente o culpable del delito que le imputan?

Solo nos correspondía establecer la fecha. Si en otros órganos se llega a determinar, con prueba legalmente obtenida, que los hechos fueron después de la firma

de la paz, deben ser la Fiscalía o la Corte Suprema las que actúen. Lo que dijimos es que la conducta no debe quedar impune y que, dentro del principio de extraditar o juzgar, si no se extradita debe haber juzgamiento, y este arranca con la investigación.

¿Cómo se dieron cuenta de que la actuación de la DEA fue irregular?

Cuando le solicitamos a la directora de asuntos internacionales de la Fiscalía que nos remitiera los soportes de la asistencia judicial que debió pedir el gobierno extranjero y tramitar el Estado colombiano a través de la Fiscalía. Ella nos contestó que esas personas actuaron como particulares y no requerían control judicial. No sabemos si eran o no particulares, pero quedó acreditado que estaban actuando bajo instrucciones de agentes de Estados Unidos, y eso era, por lo menos, irregular.

Durante la discusión del fallo, ¿ustedes pensaron en el tsunami político que podía provocar la decisión?

Como jueces, tenemos que actuar con independencia y sin presiones, sin pensar en lo que pasará por la cabeza de la gente. Igual podría haber un efecto político con una decisión contraria a la que tomamos. Lo que se impuso en el debate fue la interpretación de las normas, nos amparamos en el acuerdo de paz. Los jueces ordinarios están ligados a la Constitución política y la ley, y los de la justicia transicional también, pero, además, somos guardianes del acuerdo de paz. Por eso se llama Tribunal para la Paz.

¿Qué les diría a los críticos del fallo?

Que el respeto a la institucionalidad debe ser en todos los niveles, pero que tiene particular importancia cuando se trata de preservar la paz.

La respuesta de Estados Unidos

El Gobierno de Estados Unidos calificó ayer como “lamentable” la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de no extraditar, y por el contrario dejar en libertad, al exguerrillero Jesús Santrich. La embajada de ese país aseguró que EE. UU. “cumplió con los requisitos de extradición establecidos con Colombia y nuestro pedido estableció que los delitos de los cuales se acusa al señor Santrich se produjeron después del 1.º de di-

cembre de 2016”, es decir, luego de que se firmó el acuerdo de paz entre el Gobierno colombiano y la desmovilizada guerrilla de las Farc. De acuerdo con el gobierno estadounidense, Santrich es requerido por una corte de Nueva York “por presuntamente conspirar” para el envío de cocaína “entre junio de 2017 y abril de 2018”. Por esa razón considera que la apelación que presentará la Procuraduría es “esencial y urgente”.

Las tres alternativas que tendría la JEP sobre nuevo video del exguerrillero

El video que se conoció en la noche del miércoles, luego de que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) decidió no permitir la extradición del exguerrillero Jesús Santrich, no alcanzó a ser valorado por los magistrados que tomaron esa decisión, y por eso surgió el interrogante sobre si esta prueba podría ser tenida en cuenta en la segunda instancia.

Santrich, requerido por Estados Unidos por al parecer haber conspirado para enviar cocaína a ese país luego de la entrada en vigencia del acuerdo de paz (el 1.º de diciembre de 2016), en ese video se ve sosteniendo una reunión con Marlon Marín (sobrino de Iván Márquez, hoy preso en EE. UU.) y otras dos personas. Dicha grabación podría aportar nuevos elementos para determinar la suerte de Santrich, a quien la JEP decidió aplicarle la garantía de no extradición al considerar que las pruebas no eran suficientes para determinar la fecha del delito que se le atribuye.

La sección de revisión, instancia de la JEP que estudió el caso, no tuvo en cuenta ese video, pues no le fue remitido ni por la Fiscalía ni por las autori-

dades estadounidenses, “a pesar de las reiteradas solicitudes”.

La Procuraduría dijo que apelará esa decisión argumentando que no se le debe aplicar esa garantía al exguerrillero, pues considera que si hay pruebas según las cuales esa conducta ocurrió después del acuerdo de paz, y que es la Corte Suprema la que deberá analizar si el exjefe de las Farc debe ser extraditado.

En ese recurso “existe la posibilidad de incorporar todas las pruebas que han aparecido con posterioridad a la decisión de la primera instancia, es elemental hacerlo”, dijo el procurador general, Fernando Carrillo.

De acuerdo con distintos juristas consultados por EL TIEMPO, la sección de apelaciones de la JEP, que conocerá el recurso de la Procuraduría, tendría al menos tres opciones frente a ese video, que se consideraría prueba sobreviniente. La primera es que la sección de apelación “sí puede analizar pruebas posteriores a las que se analizaron en primera instancia; eso sí, dan-

“

“Existe la posibilidad de incorporar todas las pruebas que han aparecido con posterioridad a la decisión de la primera instancia. Es elemental hacerlo”.

Fernando Carrillo
PROCURADOR GENERAL

do el derecho de contradicción a la defensa de Santrich”, como lo explica el profesor de la Universidad Externado y penalista Camilo Burbano.

“Si bien es cierto que la regla general en el derecho procesal es que la apelación solo conoce de lo que se debatió en primera instancia, también es cierto que el derecho procesal debe estar por debajo del derecho sustancial, del derecho

a la justicia en este caso, y del derecho de las víctimas. Si las pruebas son relevantes para cambiar la decisión, debe tenerlas en cuenta”, asegura.

Una segunda opción, como lo explica el profesor de la Universidad del Rosario y también penalista Francisco Bernate, es que la segunda instancia no tenga en cuenta esas pruebas en la apelación que interponga la Procuraduría. “En materia penal, eso no se puede hacer; en asuntos laborales y civiles sí se pueden decretar nuevas pruebas, pero en penales no”, explica.

La tercera opción la expone el penalista Iván Cancino, experto en temas procesales. Si bien coincide en que en segunda instancia no se pueden evaluar temas nuevos, como lo sería el video de Santrich, los magistrados de apelación podrían decretar “la nulidad a partir de la etapa probatoria”, y devolver el caso a la primera instancia, para que allí sea introducida la nueva evidencia, y con esta se tome de nuevo una decisión.

Los juristas señalan también que el alegato en el que

Santrich da fechas (en 2017 y 2018) sobre reuniones con mexicanos -que, según la acusación, sería con quienes negociaba el cargamento de droga, aunque Santrich sostiene que negociaba proyectos productivos-, no puede considerarse como prueba para determinar la fecha del supuesto delito. “Los alegatos no son pruebas, los alegatos son análisis que se hacen tanto jurídicos como probatorios de un caso. Si bien tanto la defensa técnica, entendiéndose el abogado, como la defensa material, entendiéndose el procesado, pueden presentar estos alegatos (de conclusión o finales), estos no se entienden como un testimonio, se entienden como un análisis que realiza la defensa, y por tanto no tienen valor probatorio”, dice Burbano. La JEP aplicó esta regla procesal en su decisión, en la que el magistrado ponente del caso, Jesús Ángel Bobadilla, explicó que “nunca se concluyó que la conducta no existió, sino que por falta de pruebas no pudo evaluarse”.

Redacción Paz